

UNA CAMPAÑA DE VERDAD

EL historiador inglés Raymond Carr ha escrito que el general Franco logró permanecer cuatro décadas en el Poder a base de sustituir el choque de ideas característico de los regímenes liberales por una mezcla, hábilmente dosificada, de fuerza y astucia. Quizá nunca se ha descrito el franquismo con tanto realismo como en esta frase; pero, sobre todo, nunca se ha mostrado de forma más clara la neta diferencia que separa a un régimen democrático de uno autoritario. Este último pretende superar las diferencias de ideas y el conflicto de intereses cuando en realidad concede el monopolio de unas y de otros a una parte de la sociedad, normalmente muy pequeña; la democracia, en cambio, consiste en el enfrentamiento de las distintas opciones en lucha constante dentro de un marco de respeto a su libre expresión.

Viene todo esto a propósito de que resulta imprescindible que todos los españoles (y, en primer lugar, la clase política) empiecen a darse cuenta de que el próximo 1 de marzo de 1979 las elecciones se deben plantear de una manera muy diferente a como sucedió el pasado 15 de junio de 1977. Entonces planeaba sobre el electorado español la alternativa de si elaborar una Constitución de nueva planta que hiciera posible la democracia en nuestro país o reformar tan sólo las instituciones heredadas del pasado. La gran cuestión era la democracia y sobre ella nació un consenso que luego se ha traducido en la elaboración de una ley fundamental con un arco constitucional apreciablemente extenso.

En esas condiciones no es extraño que apenas se debatieran concepciones ideológicas, pues el común denominador de la búsqueda de la libertad lo impedía. Mucho menos podían enfrentarse programas de gobierno excepto para enunciar unos cuantos principios generales que, además, solían ser demasiado parecidos. Por otro lado existía la presunción de que se producirían unos resultados electorales que luego fueron en buena medida confirmados. En un sistema democrático nunca es lícito acusar al elector de irresponsabilidad (y, en este caso, el acusado habría de ser, al mismo tiempo, la clase política), pero no cabe la menor duda de que todo este conjunto de factores influyó en cómo se votó entonces.

Ahora las circunstancias son muy diferentes. No es sólo que los resultados electorales resultan difícilmente previsibles, sino que, además, felizmente, tenemos una Constitución con la que es posible que muchos españoles no estén por completo de acuerdo, pero que establece un marco de convivencia suficiente para estabilizar la democracia. La libertad ya no está en discusión, aunque, día tras día, haya asesinos terroristas que pretendan privarnos de ella. Ya no se pueden ofrecer vaguedades como respuesta a los problemas que tiene el país, sino programas de actuación capaces de solucionar la crisis económica, la agresión terrorista y llevar a cabo las transformaciones en la legislación que la Constitución implica. Finalmente el elector, el ciudadano español, sabe ya (o pronto va a adquirir conciencia de ello) que el 1 de marzo el país adoptará colectivamente una decisión que afectará de modo decisivo a su forma de entender la vida y que lo que opine sobre los temas más diversos debe traducirse necesariamente a la hora de elegir su papeleta.

En consecuencia, las próximas elecciones deben ser, imprescindiblemente, lo que ya son en el modelo europeo occidental que, de forma voluntaria y consciente, los españoles hemos elegido; han de suponer una confrontación glo-

bal, decidida y neta de concepciones ideológicas distintas. Hubo quien en los pasados comicios ofreció un pacto de no agresión. Nosotros no vamos a pedir lo contrario, pero si creemos que España merece que sus fuerzas políticas firmen un pacto implícito de confrontación. Al hacer esta declaración, «Publius» no quiere, de ninguna manera, favorecer ningún tipo de radicalización, sino dar a una elección democrática el significado que verdaderamente ha de tener.

La confrontación debe producirse entre todos los grupos políticos, aunque resulta previsible que algunos de ellos intenten demostrar que son algo diferente de lo que sus programas o sus vinculaciones internacionales dicen. Pero es especialmente necesaria entre los dos que en la elección anterior tuvieron un mayor apoyo por parte de los votantes. El P. S. O. E. supo hacer, en junio de 1977, una excelente campaña electoral, a la que tan sólo cabría reprocharle la diferencia entre sus presupuestos teóricos y programáticos y la realidad ofrecida en la propaganda. Desde luego el caso de U. C. D. no fue, ni remotamente, el mismo: sólo atacó a la derecha, actuó sin garra y desconoció cuál era su enemigo real, confiando excesivamente en un voto que luego no llegó en la proporción esperada. Esta dura lección puede no haber sido aprendida y U. C. D. corre el riesgo de cometer los mismos errores en la presente ocasión. Si sus dirigentes se dedican a atacar sólo a la derecha, si pretenden desconocer que el centro sociológico del país es más amplio que U. C. D., si tratan de competir con el socialismo con un lenguaje idéntico, sin darse cuenta que una cosa es el progresismo y otra el socialismo, y que el primero puede ser mucho más coherentemente defendido desde una posición de centro, se habrán puesto todas las condiciones necesarias no sólo para intentar un fraude con el electorado como víctima, sino para cometer un acto de suicidio quizá irreversible.

Finalmente quisiéramos hacer una reflexión más. Es muy posible que el sistema de partidos en España no permita la formación de una mayoría homogénea después de las elecciones. Pero en ningún caso la campaña electoral ha de hacerse partiendo de esta eventualidad. La formación de un gobierno es una cuestión posterior, que sólo puede plantearse a partir de las posibles relaciones de convergencia ideológica y conocida la aritmética parlamentaria. Pero esto no excluye una campaña electoral de seria y decidida confrontación, sino que precisamente la hace inevitable.—«PUBLIUS».